



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN:	11001-33-35-026-2019-00518-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO- LESIVIDAD
DEMANDANTE:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
DEMANDADO:	MIRYAM MARGARETH LA ROTTA VARGAS

En el presente asunto, la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, instauró demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, con el objetivo de declarar la nulidad de la Resolución VPB 3292 del 10 de marzo de 2014, por medio del cual se reconoció y pagó pensión de vejez a favor de la señora Miryam Margareth La Rotta Vargas, a partir del 15 de mayo de 2005, de conformidad con lo expuesto en la ley 71 de 1988.

Pues bien, estando la presente demanda en estudio de admisibilidad, encuentra el Despacho que no es posible continuar avocando conocimiento de la presente demanda, de acuerdo a las siguientes,

CONSIDERACIONES

Reitera el Despacho, que en el presente asunto, **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, promueve demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, contra **Miryam Margareth La Rotta Vargas**, con la finalidad de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución VPB 3292 del 10 de marzo de 2004, por medio del cual se reconoció y pagó pensión de vejez a favor de la señora Miryam Margareth La Rotta Vargas, a partir del 15 de mayo de 2005, de conformidad con lo expuesto en la ley 71 de 1988.

Al analizar detenidamente la totalidad de documentales aportadas en el expediente, el Despacho considera que carece de jurisdicción para conocer del presente asunto, debido a la naturaleza de la vinculación laboral que sostuvo el demandado y beneficiario de la pensión de vejez en cuestión.

El artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determinó la cláusula general del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y sobre el particular, consagró que esta conocería de los asuntos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y a la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona derecho público.

En armonía con lo anterior, el artículo 105 de la misma normativa, expresamente exceptuó los asuntos que no conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, entre los cuales, merecen destacar las controversias de carácter laboral surgidas entre las entidades públicas y los trabajadores oficiales.

Por otra parte, el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2011, que modifica el Código de Procedimiento Laboral, determinó que las controversias referentes al sistema de seguridad social integral, que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, **cualquiera sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, correspondería a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral y Seguridad Social.**

En reciente pronunciamiento, el Consejo de Estado analizó la falta de jurisdicción por parte de lo contencioso administrativo, para conocer de la demanda interpuesta presentada por COLPENSIONES, que pretende se declare la nulidad de un acto administrativo expedido por la misma entidad; **en el cual se señaló que el Juez Contencioso Administrativo, carecía de jurisdicción para conocer el asunto allí planteado, porque el objeto del litigio versa sobre la seguridad social de un trabajador del sector privado.**¹

Al analizar las reglas de competencia de la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, el Alto Tribunal determinó que esta puede pronunciarse sobre la legalidad del reconocimiento de un derecho derivado de la relación laboral o de la seguridad social, indistintamente de la forma en que este se produzca.

Al respecto, **se precisó que las controversias relativas a prestaciones o liquidaciones de carácter laboral que realiza cualquier entidad pública frente a un trabajador oficial, deben ser resueltas por el juez especializado del contrato de trabajo, independientemente de que el reconocimiento de las mismas se realice a través de acto administrativo**, pues entenderlo de manera diferente, implicaría dar prevalencia a un criterio formal en desconocimiento de las normas de competencia señaladas por el legislador.

Concluyó la Corporación, que en **los conflictos originados de las relaciones laborales y con la seguridad social, la competencia se define por combinación de la materia objeto de conflicto y el vínculo laboral, sin que la**

¹ C.E., S.2ª, proveído de marzo 28/2019, exp. 11001-03-25-000-2017-00910-00 (4857), M.P. William Hernández Gómez.

forma de reconocimiento o negativa del derecho sea determinante; correspondiendo a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, dilucidar las controversias relativas a la seguridad social de, entre otros sujetos, los trabajadores oficiales.

Así las cosas, este Despacho Judicial, una vez analizado tanto el escrito de demanda, como las documentales aportadas al plenario, evidencia que la demandada, señora contra **Miryam Margareth La Rotta Vargas**, se encontraba vinculado a una empresa del sector privado, toda vez que, de acuerdo al reporte de semanas cotizadas en pensiones, y la resolución objeto de demanda, las últimas cotizaciones al sistema general de seguridad social, fueron realizada por la empresa "**JORGE CAJIAO Y CIA LTDA**", del 29 de abril de 1994 al 19 de mayo de 1994. Por tanto, es claro para el Despacho, que la demandada, señora **Miryam Margareth La Rotta Vargas**, previo adquirir el estatus de pensionado, se encontraba laborando en una empresa del sector privado, a través de un contrato de trabajo.

Por último y no por ello menos importante, este Despacho debe manifestar que considera que en el presente asunto, no existe un precedente judicial establecido en una sentencia de unificación que haya decantado de manera definitiva y, en gracia de discusión, ya se ha cumplido con los requisitos o reglas de transparencia y suficiencia por parte del Magistrado Ponente de la providencia de fecha 28 de marzo de 2019, en la argumentación esgrimida, de la cual, en el presente, se acogen íntegramente.

Corolario de lo anterior, este Despacho Judicial considera que el conocimiento del presente asunto corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en consideración a que se trata de una controversia en la cual se encuentra involucrado un trabajador oficial, y por ende, se ordenará la remisión inmediata a la justicia laboral en el estado en que se encuentra, aplicando la regla prevista en el artículo 138 del Código General del Proceso.

En virtud de lo anterior el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN dentro del proceso con radicado No. **11001-33-35-026-2019-00518-00**, por las razones expuestas en la parte motiva de presente providencia.

SEGUNDO. Por secretaría, **REMITIR** inmediatamente el proceso en el estado que se encuentre a los Jueces Laborales del Circuito de Bogotá – Reparto, para lo de su competencia y por las razones expuestas en la parte motiva de presente providencia.

TERCERO.- Por Secretaría déjense las constancias respectivas y dese cumplimiento a la mayor brevedad a lo aquí resuelto.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes
la providencia anterior hoy **9 DE DICIEMBRE DE 2019**, a las
ocho de la mañana (8:00 a.m.)


LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA